

España necesita un gran pacto de Estado para salvar la Educación - El Mundo - 31/08/2015

España necesita un gran pacto de Estado para salvar la Educación

POR MÁS que para la clase política se haya convertido en un lugar común y un recurso electoral, desde este periódico no nos cansaremos de repetir que el mayor déficit estructural de la democracia española lo representa el sistema educativo. La falta de voluntad para consensuar una política de Estado viene lastrando el desarrollo cultural y económico de nuestro país a la vez que condena a los estudiantes y trabajadores españoles a presentar uno de los niveles de formación más bajos de Europa. Las cifras no mienten. Año tras año, la tasa de fracaso escolar sigue doblando la media comunitaria y el informe PISA o el *ranking* internacional de universidades de Shanghai, por poner sólo dos ejemplos, ponen de manifiesto el deficiente estado de nuestra Educación en todos sus grados.

Es de agradecer, por tanto, el talante del nuevo ministro del ramo, que hoy en nuestras páginas recuerda la importancia de no convertir la Educación en «un campo de batalla ideológico». Sorprende, sin embargo, que lo haga cuando acaba de aterrizar en el cargo y cuenta con apenas dos meses para trabajar en el Ministerio antes de las próximas elecciones generales; y más aún, que lo proponga como miembro de un Ejecutivo que ha desaprovechado una inmejorable oportunidad para corregir las graves deficiencias del sistema. A pesar de la evidencia de que la profunda crisis económica ha golpeado a España más que a otros países por carecer de un sistema educativo competitivo y de calidad, el Gobierno ha renunciado a acometer una de las reformas estructurales más urgentes y necesarias.

La actitud dialogante de Íñigo Méndez de Vigo evidencia aún más el error que cometió Rajoy al elegir, para una misión tan sensible, a José Ignacio Wert, que para colmo abandonó irresponsablemente el Ministerio antes de la implantación de su

ley educativa. Aunque la Lomce tiene aspectos que son válidos, lo cierto es que fue aprobada sin el diálogo y el consenso necesarios y no aborda frontalmente los problemas endémicos de un sistema que arrastra las consecuencias nefastas de la LOGSE socialista: la sustitución de la cultura del esfuerzo por una pedagogía del entretenimiento; la pérdida de autoridad del profesorado, su desplazamiento de la posición central de la enseñanza y la devaluación social y económica de su actividad; una prolongación innecesaria de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, cuya consecuencia más inmediata es la infantilización del alumnado; la reducción del bachillerato a sólo dos cursos; la nivelación a la baja de los estudiantes como consecuencia de un concepto de igualdad mal entendido; o la promoción automática y la obtención del título con asignaturas suspensas son sólo algunos de los síntomas de una enfermedad cuyo remedio compete a todas las fuerzas políticas, las organizaciones de padres de alumnos y los agentes sociales.



chillerato a sólo dos cursos; la nivelación a la baja de los estudiantes como consecuencia de un concepto de igualdad mal entendido; o la promoción automática y la obtención del título con asignaturas suspensas son sólo algunos de los síntomas de una enfermedad cuyo remedio compete a todas las fuerzas políticas, las organizaciones de padres de alumnos y los agentes sociales.

En definitiva, se trataría de apostar decididamente por una reforma de la enseñanza que se proponga como objetivo devolver los niveles de calidad perdidos en tantos años de desidia política. Una reforma que evite situaciones como la actual, en la que varias comunidades autónomas han anunciado que no implantarán la nueva ley por razones partidistas ante la posibilidad de que un nuevo gobierno la derogue. España no puede permitirse renunciar a un régimen educativo unitario que perpetúe la existencia de 17 sistemas diferentes y perjudique la finalidad vertebradora de la educación. La previsible fragmentación política del Parlamento que prevén los sondeos para las próximas elecciones generales hará más difícil aún esta asignatura pendiente desde la Transición a la que, sin embargo, deberían comprometerse todas las fuerzas políticas.